Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a doce de marzo de dos mil veinticinco.

**Visto** el expediente relativo al recurso de revisión **00709/INFOEM/IP/RR/2025**, interpuesto por **XXXXXXXXXX XXX XXXXXX**, en lo sucesivo se le denominara **LA PARTE RECURRENTE**, en contra de la respuesta a la solicitud de información con número de folio **00542/UAI/IP/2024**, por parte del **Unidad de Asuntos Internos**, en lo sucesivo **EL SUJETO OBLIGADO;** se procede a dictar la presente resolución, con base en lo siguiente.

**A N T E C E D E N T E S**

**1.** **SOLICITUD DE INFORMACIÓN.** Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro, **LA PARTE RECURRENTE**, presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX)** ante **EL SUJETO OBLIGADO**, solicitud de acceso a la información pública, registrada bajo el número de expediente**00542/UAI/IP/2024**,mediante la cual solicitó la siguiente información:

*“1. NUMERO DE DENUNCIAS Y QUEJAS RECIBIDAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. 2. DEL NUMERAL ANTERIOR INDIQUE EL MEDIO POR EL CUAL FUERON RECIBIDAS DICHAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS. 3. DE LOS NUMERALES ANTERIORES REMITA LA VERSIÓN PÚBLICA DE LOS OFICIOS EMITIDOS A FIN DE ATENDER DICHAS DENUNCIAS. 4. INDIQUE CUALES FUERON LAS ACCIONES A FIN DE ATENDER LAS DENUNCIAS EN MERITO. 5. INDIQUE EL ESTATUS PROCESAL DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. 6. VERSION PÚBLICA DE LOS ACUERDOS DE CIERRE; REMISIÓN Y ANALISIS DE LAS DENUNCIAS Y QUEJAS TURNADAS A LA DIRECCIÓN DE RESPONSIBILIDADES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024. CABE SEÑALAR QUE SI BIEN LOS EXPEDIENTES SE ECUENTRAN EN PERIODO DE INVESTIGACIÓN SE REQUIERE LA FECHA DE INICIO, FECHA DE RADICACIÓN, ACCIONES REALIZADAS POR CADA EXPEDIENTE Y LA VERSIÓN PÚBLICA DE TODO LO ACTUADO HASTA EL DIA DE HOY” (Sic).*

Modalidad de entrega: A través del **SAIMEX**.

**2. DE LA PRÓRROGA.** En fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, **EL SUJETO OBLIGADO** solicitó una prórroga para la entrega de la información requerida en las solicitudes de acceso a la información tal como se observa a continuación:

*“Con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento que el plazo de 15 días hábiles para atender su solicitud de información ha sido prorrogado por 7 días en virtud de las siguientes razones:*

*Se aprueba la ampliación de plazo mediante el Acuerdo UAI/CT/EXTRAORDINARIA/2025/01/05*

*MTRO HÉCTOR DANIEL ZARAGOZA MANRÍQUE*

*Responsable de la Unidad de Transparencia”*

**EL SUJETO OBLIGADO**, adjunta los archivos electrónicos:

“***542.pdf***”: Oficio signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual señala que el día 24 de enero del año 2025, el Comité de Transparencia emitió el Acuerdo UAI/CT/ESTRAORDINARIA/2025/01/05 por el cual aprobó por unanimidad de votos la ampliación del plazo de la solicitud de información.

“***ACTA 1a SESION EXTRAORD-2025.pdf***”: Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2025, en donde su quinto punto del orden del día se aprueba la ampliación de plazo para otorgar respuesta a la solicitud de información, cumpliendo con las formalidades requeridas.

**3. RESPUESTA.** Con fecha cinco de febrero del dos mil veinticinco, **EL SUJETO OBLIGADO** otorgó, a través del SAIMEX, respuesta a la solicitud de acceso a la información en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*se adjunta respuesta a su solicitud*

*ATENTAMENTE*

*MTRO HÉCTOR DANIEL ZARAGOZA MANRÍQUE”*

**EL SUJETO OBLIGADO** adjuntó para tal efecto el archivo electrónico siguiente:

“***R-542.pdf***”: Oficio de fecha cinco de febrero de dos mil veinticinco, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual señala que turnó la solicitud a la Dirección de Investigación y Supervisión, la cual señaló que la información requerida es parte de los expedientes y se encuentra glosada en cada uno de los legajos que los componen, por lo que la información tendría que pasar por un conjunto de actividades para procesarla como son búsqueda y extracción de la documentación de expedientes, la digitalización, la reproducción en formato compatible con medio magnético y el análisis e identificación de información confidencial o reservada, así como testado y generación de versiones públicas, siendo que la información excede la capacidad máxima de carga dentro del SAIMEX, poniendo a disposición lo siguiente:

1. Número de denuncias y quejas recibidas del primero de septiembre al 15 de diciembre de 2024.

2. el medio de atender dichas denuncias.

3. Oficios emitidos a fin de atender las denuncias.

4. Acciones a fin de atender las denuncias en mérito.

5. El estatus procesal de las denuncias recibidas del 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2024.

6. Acuerdos de cierre.

Por lo que podrá hacer la consulta directa de manera calendarizada programando cada jueves del mes de febrero del año en curso, señalando la ubicación y el horario para la entrega de 200 fojas a fin de atender la solicitud.

**4. DEL RECURSO DE REVISIÓN.** Inconforme con la respuesta del **SUJETO OBLIGADO,** en fecha seis de febrero de dos mil veinticinco, **LA PARTE RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión, el cual fue registradoen el sistema electrónico con el expediente número  **00709/INFOEM/IP/RR/2025**, en el cual manifiesta, lo siguiente:

1. ***Acto Impugnado:***

*“CAMBIO DE MODALIDAD Y NEGATIVA DE IENTRAGAR NFORMACIÓN PUBLICA” [sic]*

1. ***Razones o Motivos de Inconformidad****:*

*“CAMBIO DE MODALIDAD Y NEGATIVA DE IENTRAGAR NFORMACIÓN PUBLICA” [sic]*

**5. TURNO.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

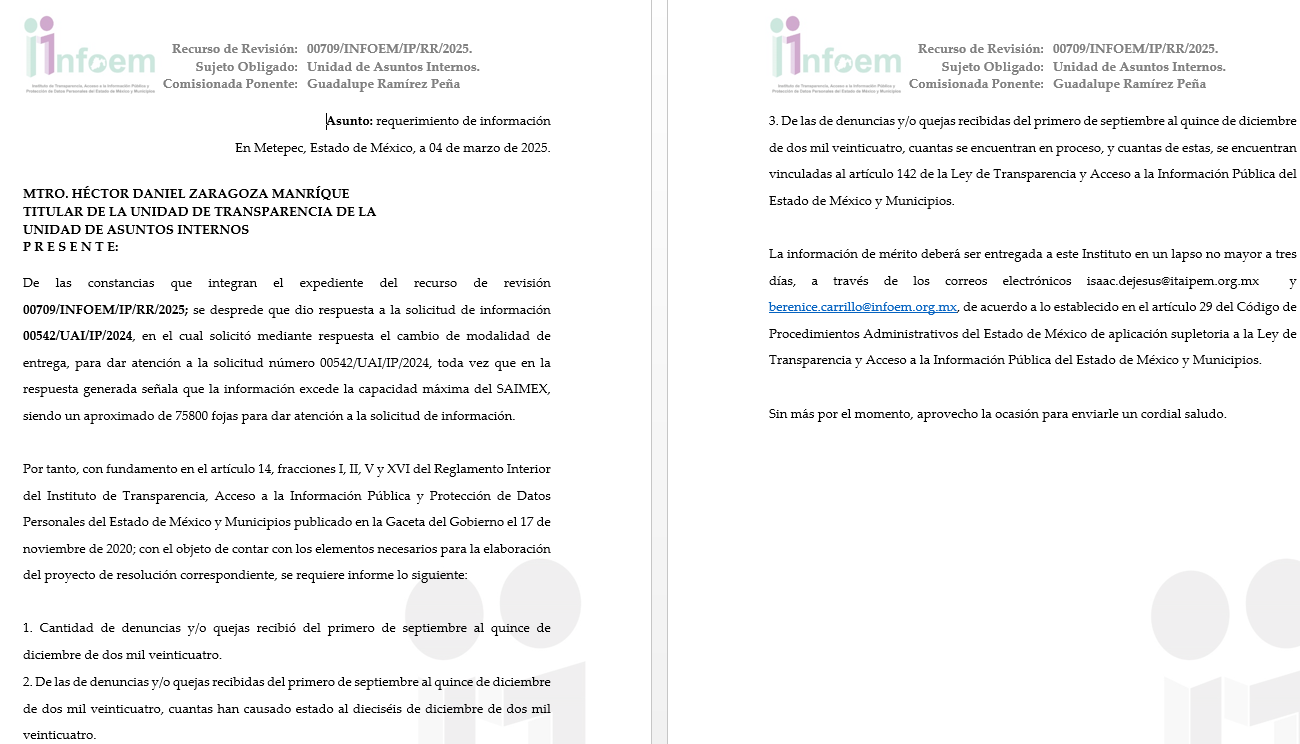
**6. ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.** Con fecha **once de febrero de dos mil veinticinco**,este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y **EL SUJETO OBLIGADO** presentará su informe justificado.

**7. MANIFESTACIONES**. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil veinticinco se recibió, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), el informe justificado del **SUJETO OBLIGADO**,a través del siguiente archivo electrónico:

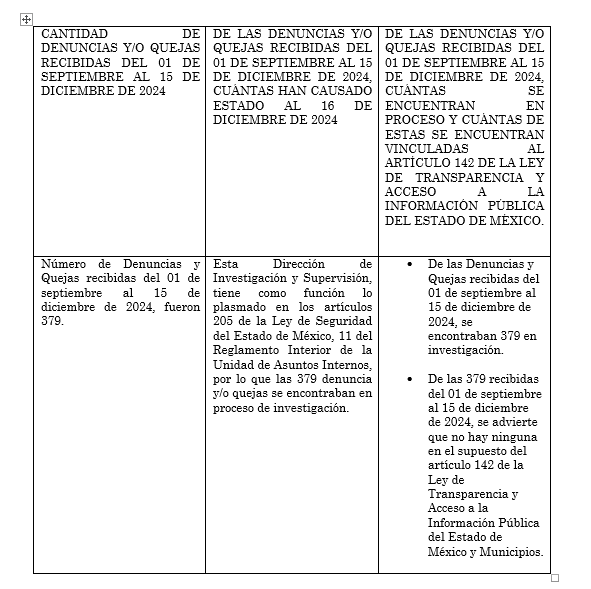
Oficio de fecha doce de febrero de dos mil veinticinco, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual ratifica su respuesta inicial.

Documento que se puso a la vista de **LA PARTE RECURRENTE** en fecha diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, mismo que resultó omiso de emitir sus manifestaciones conforme a derecho le corresponde.

**8. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL.** El **cuatro de marzo de dos mil veinticinco**, se envió por correo electrónico un requerimiento de información adicional al **SUJETO OBLIGADO**, el cual consistió en lo siguiente:



Del cual, **EL SUJETO OBLIGADO**, otorgó respuesta en lo medular al requerimiento adicional de información de la siguiente forma:



**9. CIERRE DE INSTRUCCIÓN.** El once de marzo de dos mil veinticinco al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar el expediente a resolución, en términos del artículo 185 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO. COMPETENCIA.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. OPORTUNIDAD Y PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN.** Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previsto en el artículo 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, contados a partir de la fecha en que **EL SUJETO OBLIGADO** emitió la respuesta, toda vez que esta fue pronunciada el día cinco de febrero del año dos mil veinticinco, mientras que **LA PARTE** **RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión en fecha seis de febrero de dos mil veinticinco, es decir, al siguiente día hábil de haber recibido la respuesta.

Además, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, es de suma importancia señalar que **LA PARTE** **RECURRENTE**, proporcionó un seudónimo como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, lo anterior no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

***"Las solicitudes anónimas, con nombre incompleto o seudónimo serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."***

Ahora bien, del análisis efectuado se advierte que resulta procedente la interposición del recurso y se concluye la acreditación plena de todos y cada uno de los elementos formales exigidos por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en vigor, en atención a que fue presentado mediante el formato visible **EL SAIMEX.**

Finalmente, resulta procedente la interposición del recurso, según lo aducido por **LA PARTE RECURRENTE** en sus razones o motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracción I y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; que a la letra dice:

***“Artículo 179****.* ***El recurso de revisión*** *es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública****, y procederá en contra de las siguientes causas****:*

*I. La negativa a la información solicitada;*

*(…)*

*VIII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;”*

**TERCERO. MATERIA DE LA REVISIÓN.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: verificar si la respuesta otorgada por **EL** **SUJETO OBLIGADO** satisface el derecho de acceso a la información pública de **LA PARTE** **RECURRENTE**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**CUARTO. ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DEL ASUNTO.** En primer término, se estima pertinente mencionar que el derecho de acceso a la información está consagrado en instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano se ha adherido, sin oponer reserva alguna sobre lo que nos interesa, adoptando dichas disposiciones al Derecho Interno, específicamente a nivel Constitucional, tal y como lo prevén los arábigos 1 párrafos primero, segundo y tercero y 6 apartado A fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII que a la letra señalan:

***“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte****, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

***Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.***

***Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.*** *En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley*

*[…]*

***“****Artículo 6o.*

*[...]*

*A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención.*

*Por lo que hace a la información relacionada con los datos personales en posesión de particulares, la ley a la que se refiere el artículo 90 de esta Constitución determinará la competencia para conocer de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones.*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

*IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija esta Constitución y las leyes.*

*V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

*VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.*

*VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.*

*VIII. Los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes en la materia determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan*

*los sujetos obligados.*

*Los sujetos obligados se regirán por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que ésta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.*

*El ejercicio de este derecho se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.*

Así, de la interpretación sistémica de los numerales inmersos en los instrumentos legales Internacionales y Nacional, el derecho de acceso a la información es un derecho del cual goza toda persona sin discriminación alguna, el cual se ejerce ante los Poderes del Estado, entidades, dependencias o cualquiera persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, siendo pública toda la información que posean con las excepciones enmarcadas, para lo cual queda demostrado que el presente sujeto obligado debe cumplir con dichos dispositivos legales.

En primer lugar, es conveniente analizar si la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** cumple con los requisitos y procedimientos del derecho de acceso a la información pública, en atención a que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en su artículo 4, dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se transcribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

De lo anterior, se desprende que los Sujetos Obligados tienen el deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obre en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual a la letra dice:

*“****Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Siempre y cuando no se trate de información reservada o clasificada, que difundirla pondría en riesgo la seguridad jurídica y física del titular de la información, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por otra parte, conviene mencionar que la Ley de Transparencia vigente en el Estado de México refiere:

***“Artículo 18.******Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad*** *y reutilización de la información que generen.*

***Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados****.*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.*

*Si el sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, debía generar, poseer o administrar la información, pero ésta no se encuentra, el Comité de transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia, debidamente fundado y motivado, en el que detalle las razones del por qué no obra en sus archivos.”*

De los dispositivos legales en comento, se aprecia que todo acto de autoridad en el ejercicio de sus funciones y atribuciones debe estar documentado, por lo que para dar atención a una solicitud de información el Sujeto Obligado debe entregar el soporte documental en donde conste la información requerida, debiendo contemplar que no se trate de información reservada o confidencial, por lo que debe cuidar dicha información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

De ahí que **EL SUJETO OBLIGADO** cuenta con el deber de satisfacer las solicitudes de acceso a la información que le sean formuladas y entregar la información pública que obre en sus archivos pudiendo ser de manera electrónica; más aún si la misma se trata de información relativa a obligaciones de transparencia, la cual se relaciona con aquella que se genere de acuerdo con sus facultades, atribuciones y obligaciones señaladas por la Ley en la materia[[1]](#footnote-1), así como de interés público, es decir, aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, y cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados[[2]](#footnote-2), como pudiera tratarse de aquella relacionada con las obligaciones de transparencia señaladas en los artículos 92 de la Ley de la Materia.

Una vez determinada la vía sobre la que versará el presente recurso, y previa revisión del expediente del recurso de revisión materia de la presente resolución, se advierte lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Solicitud** | **Respuesta** | **Informe Justificado** |
| 1. Número de denuncias y quejas recibidas del 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2024.  2. Del numeral anterior indique el medio por el cual fueron recibidas dichas quejas y/o denuncias.  3. De los numerales anteriores remita la versión pública de los oficios emitidos a fin de atender dichas denuncias.  4. Indique cuales fueron las acciones a fin de atender las denuncias en mérito.  5. Indique el estatus procesal de las denuncias recibidas del 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2024.  6. Versión pública de los acuerdos de cierre; remisión y análisis de las denuncias y quejas turnadas a la dirección de responsabilidades del 01 de septiembre al 15 de diciembre del 2024. | La Dirección de Investigación y Supervisión señalo que la información requerida es parte de los expedientes y se encuentra glosada en cada uno de los legajos que los componen, por lo que la información tendría que pasar por un conjunto de actividades para procesarla como son búsqueda y extracción de la documentación de expedientes, la digitalización, la reproducción en formato compatible con medio magnético y el análisis e identificación de información confidencial o reservada, así como testado y generación de versiones públicas, siendo que la información excede la capacidad máxima de carga dentro del SAIMEX, poniendo a disposición lo siguiente:  1. Número de denuncias y quejas recibidas del primero de septiembre al 15 de diciembre de 2024.  2. el medio de atender dichas denuncias.  3. Oficios emitidos a fin de atender las denuncias.  4. Acciones a fin de atender las denuncias en mérito.  5. El estatus procesal de las denuncias recibidas del 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2024.  6. Acuerdos de cierre.  Por lo que podrá hacer la consulta directa de manera calendarizada programando cada jueves del mes de febrero del año en curso, señalando la ubicación y el horario para **la entrega de 200 fojas a fin de atender la solicitud.** | Ratifica |

Aclarado lo anterior, **respecto al análisis del cambio de modalidad**, resulta importante señalar que en primera instancia, que el artículo 155, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisa que para presentar una solicitud, el particular podrá señalar la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

Por su parte, el artículo 158, dispone que, de manera excepcional, cuando de manera fundada y motivada lo determine **EL SUJETO OBLIGADO**, en los casos en que la entrega de la información que se encuentre a su disposición sobrepase las capacidades técnicas, administrativas y humanas del Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud, se podrá poner a disposición del solicitante la información en consulta directa.

De modo que el acceso a la información debe darse en la modalidad de entrega elegida por el solicitante, y sólo para los casos en que se encuentren impedidos los sujetos obligados podrán ofrecer otra u otras modalidades debiendo fundar y motivar adecuadamente el cambio de modalidad en la entrega de la información [[3]](#footnote-3), en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, exige que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, en el que se exprese el precepto legal aplicable al caso, además de señalarse las circunstancias, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, según se puede leer en la jurisprudencia del texto y rubro que inserta enseguida para mayor referencia:

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS****. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que han de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicable, y b).- Los cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.”*

En ese entendido, según lo dispuesto en los artículos 160 y 164 de la Ley en cita, los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, debiendo dar el acceso a la información en la modalidad de entrega solicitada, empero en caso de ofrecer otra u otras modalidades de entrega deberá fundar y motivar su respuesta, a saber:

***“Artículo 160.*** *Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.*

***Artículo 164.*** *El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad solicitada, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.” (Énfasis añadido)*

Por lo cual, los Sujetos Obligados podrán poner a disposición de los particulares, los documentos solicitados, en todo caso, por cualquier medio disponible en sus instalaciones, cuando de forma fundada y motivada se determine que implica un análisis, estudio o procesamiento, cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas administrativas y humanas.

Así, cuando se justifique el impedimento, **los Sujetos Obligados deberán ofrecer al particular otras modalidades de entrega que permita la información**, como consulta directa en las oficinas de la Unidad de Transparencia, la expedición de copias simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos, lo que se robustece con el criterio 08/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual establece lo siguiente:

***“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante.*** *De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información* ***en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.”***

Del citado criterio, se desprende que cuando **la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida,** para que la obligación de acceso a la información se tenga por cumplida, **el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.** En cualquier caso, **se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades** que lo permitan, **procurando reducir los costos de entrega.**

Además, según Calero, Natalia (2016), en la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Comentada” (pág. 401), cuando los sujetos obligados ofrezcan como modalidad de entrega de la información, consulta directa, estos deberán fundar y motivar las razones por las cuales no es posible otorgar el acceso a los documentos de otra forma; además que se deberá explicar de manera detallada lo siguiente:

* Las razones por las cuales la información implicaba un análisis, estudio o procesamiento de datos;
* Por qué motivo el tiempo, que se le otorga al Sujeto Obligado para dar respuesta, en la modalidad elegida a la solicitud de información, no le es suficiente, y
* La cantidad de recursos humanos y materiales con los que cuenta el Sujeto Obligado son insuficientes.

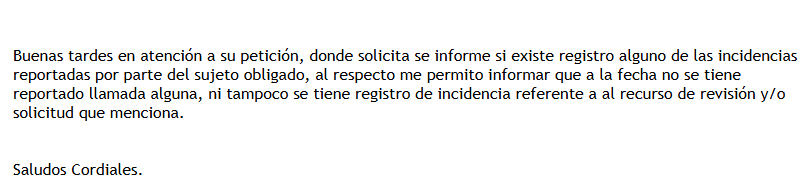
Ahora bien, entrando en materia, debe resaltarse que **EL SUJETO OBLIGADO** realiza el cambio de modalidad para la entrega de la información mediante Consulta Directa, copias simples o certificadas además de que se podrá hacer entrega sin costo alguno de la información si la persona proporciona los medios electrónicos o correo electrónico, además refiere que la información estará a disposición en el plazo establecido en el artículo 166 de la Ley de Transparencia Local para consulta de la información que da atención a la solicitud.

Expuesto lo anterior, conviene esquematizar los argumentos expuestos con anterioridad para efecto de determinar si **EL SUJETO OBLIGADO** cumplió con los elementos necesarios para el cambio de modalidad:

|  |  |
| --- | --- |
| **Elementos del cambio de modalidad** | **Contenido** |
| Número de folio de la solicitud |  |
| Referencia al peso de la información. |  |
| Referencia a otras modalidades de entrega de la información. | Además de la consulta directa se señala que: |
| Referencia que la información se pone a disposición por 60 días |  |
| Registro de su incidencia ante informática | No cuenta con incidencia. |

Por lo anterior, en primera instancia, se puede observar que el cambio de modalidad propuesto por **EL SUJETO OBLIGADO** cumple parcialmente con las formalidades establecidas por los ordenamientos en materia de transparencia, tomando en consideración que se hizo del conocimiento de **LA PARTE RECURRENTE** que no sólo pone a disposición la información en Consulta Directa para conocer de la información de su interés, sino también se informó que podía obtenerla mediante copias simples o certificadas además de que se podrá hacer entrega sin costo alguno si proporcionan el dispositivo electrónico para el almacenamiento de la información, sin embargo, si bien refiere que pone a disposición del particular la información en el plazo establecido por el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de la Materia, esta solo lo hace los días jueves del mes de febrero del dos mil veinticinco y así sucesivamente.

Además, la Dirección de Informática de este Instituto, establece que no tiene un registro en la bitácora de incidencia como a continuación se muestra:



Asimismo, no remitió el acuerdo de comité que valide el cambio de modalidad, por lo que no cumplió con las formalidades necesarias para validarlo.

De lo anterior, se concluye que, respecto al **cambio de modalidad**, este **no resulta procedente.**

Ahora bien, si bien es cierto, queda desestimado el cambio de modalidad de entrega de la información, también lo es que, resulta indispensable realizar un análisis respecto de la naturaleza de la información solicitada con la finalidad de determinar la procedencia de su entrega.

En ese sentido, es menester señalar que en el desahogo del requerimiento de información por parte del Sujeto Obligado se obtuvo lo siguiente:

* El Sujeto Obligado al dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro, **contaba con un total de 379 denuncias.**
* **Las 379 denuncias** al dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro, se **encontraban en trámite.**
* Ninguna denuncia encuadraba en alguna excepción prevista en el artículo 142 de la Ley de Transparencia de la Entidad.

Siendo que en primera instancia da por colmado el número y estatus de las denuncias y quejas requerida

Siendo que en otro punto se procede a determinar si esta información encuadra en algún supuesto de clasificación, al tenor de lo siguiente:

* **Del análisis de la clasificación de la información, relacionada con procedimientos de responsabilidad administrativa en trámite y sus excepciones.**

Conforme a lo anterior, es de mencionar que el artículo 140, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, correlativo al IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y encuadrado al Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, que se citan a continuación:

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.***

***Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*…*

*VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

*…*

***Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública***

*Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

*…*

*IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*

*…*

***Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, que se citan a continuación:***

***Vigésimo octavo.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:*

*I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite;*

*II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad; y*

*III. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir o menoscabar la actuación de las autoridades administrativas que impida u obstaculice su determinación en el procedimiento de responsabilidad.*

*…*

Establecen que aquella información que afecte o vulnere la conducción de procedimientos de **responsabilidades administrativas**, en tanto no hayan quedado firmes, será reservada.

Por lo cual, la causal de reserva prevé que la información podrá clasificarse como reservada en el caso de que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidades a los servidores públicos, es decir, esta pretende proteger la información vinculada a dichos procedimientos, situación por la que se realiza el siguiente análisis.

**I. De la existencia de un procedimiento de responsabilidad por faltas no graves en trámite o concluidos sin importar si fue absolutorio o condenatorio.**

En lo que respecta a la primera hipótesis, se tiene que el Sujeto Obligado a través del desahogo de su requerimiento de información precisó que existían 379 denuncias que se encontraban en trámite, situación que permite confirmar la existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite.

**Por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa.**

**II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.**

En lo que respecta a esta hipótesis normativa, es de destacar que la información solicitada se encuentra contenida en los expedientes conformados con motivo de las denuncias, situación por la que se colige que, las documentales solicitadas son constancias propias de procedimientos de responsabilidad que se encuentran en trámite.

Asimismo, es de destacar que el artículo 32 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México que establece lo siguiente:

* El procedimiento terminará por: desistimiento; convenio entre los particulares y las autoridades administrativas; resolución expresa del mismo; resolución afirmativa ficta que se configure y; resolución negativa ficta.

Conforme a lo anterior, se logra observar que la decisión que da fin al procedimiento corresponde a actuaciones, diligencias o constancias que obran en el expediente respectivo y que forma parte del procedimiento administrativo, pues es a través de esta es como se decide si existe o no una posible infracción; por lo que, se considera que se actualiza el **segundo elemento de la causal de clasificación.**

**III. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir o menoscabar la actuación de las autoridades administrativas que impida u obstaculice su determinación en el procedimiento de responsabilidad.**

Finalmente, en lo que respecta a esta hipótesis normativa, se advierte que la difusión de la información contenida en expedientes administrativos que se encuentran en trámite puede obstaculizar la determinación del procedimiento de responsabilidad, esto es porque, aún la autoridad no ha llegado a una determinación respecto de responsabilidad del servidor público y, por ende, entregar información que obra en un expediente puede dar pie a manipulación de pruebas, filtrar información, divulgación prematura de documentos y a una serie de actuaciones que podrían transgredir el curso de la investigación en proceso.

**Por lo que, se actualiza la última hipótesis normativa.**

Por otra parte, se considera de suma importancia mencionar que la Ley de Transparencia vigente en el Estado de México establece:

***Artículo 142.******Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando****:*

***I.******Se trate de violaciones graves de derechos humanos****, calificada así por autoridad competente;*

***II.******Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos*** *aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;*

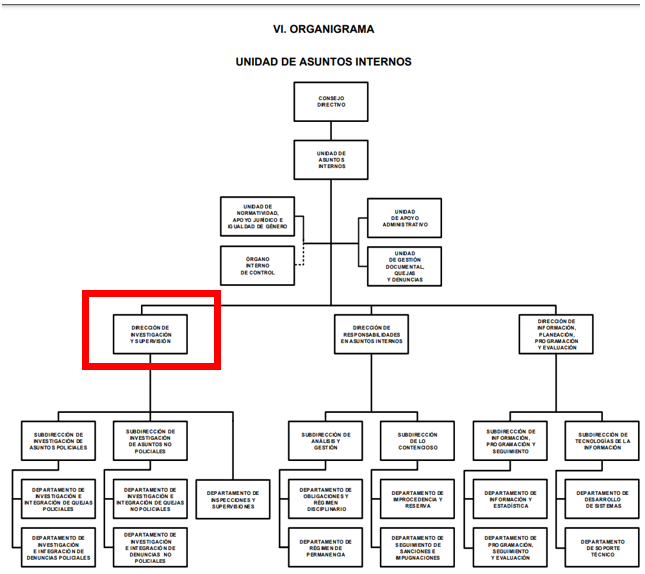
***III.******Se trate de delitos de lesa humanidad*** *conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y*

***IV. Se trate de información relacionada con actos de corrupción*** *de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.*

Del artículo en estudio, se aprecia claramente en qué supuestos no se puede invocar el carácter de reservada, sin embargo, en el presente asunto mediante el desahogo del requerimiento de información adicional, **EL SUJETO OBLIGADO** informó que ninguna de las 379 denuncias se encuentra contemplada en algún supuesto establecido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia de la Entidad.

Por lo anterior, se considera que, al actualizarse todas y cada una de las hipótesis normativas contenidas en los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información y, debido a que los expedientes en trámite no se encuentran bajo algún supuesto del artículo 142 y, resulta procedente la **reserva de la información solicitada en términos de la fracción VI del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.**

Por otra parte, no se omite mencionar que el particular solicitó información de la Dirección de Responsabilidades por lo cual, es importante establecer la estructura orgánica del **SUJETO OBLIGADO**, siendo lo siguiente:



Aclarado lo anterior, cobra relevancia citar las funciones de la Dirección de Investigación y Supervisión:

***MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS***

*206C0301040000L DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN*

*FUNCIONES:*

*− Supervisar que las quejas y las denuncias incluso anónimas, presentadas en contra de integrantes de la Secretaría de Seguridad, se registren en el sistema informático correspondiente.*

*− Conocer de quejas y denuncias, incluso anónimas, con motivo de faltas administrativas o infracciones disciplinarias cometidas por integrantes de la Secretaría de Seguridad, preservando, en su caso, la reserva de las actuaciones.*

*− Instruir y supervisar la integración en tiempo y forma de los expedientes de investigación.*

*(…)*

*- Dictar la remisión de los expedientes de investigación a la Dirección de Responsabilidades en Asuntos Internos, para los efectos legales que procedan.*

***206C0301050000L DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES EN ASUNTOS INTERNOS***

*FUNCIONES:*

*− Instruir la revisión y el registro de los expedientes de investigación remitidos por la Dirección de Investigación y Supervisión.*

*− Supervisar que los expedientes de investigación cumplan con los requisitos previamente establecidos.*

De acuerdo a lo anterior la Dirección de Investigación y Supervisión, es el área responsable de supervisar las quejas y las denuncias incluso anónimas, con motivo de faltas administrativas o infracciones disciplinarias presentadas en contra de integrantes de la Secretaría de Seguridad, registrándolas en el sistema informático correspondiente, por lo que instruye y supervisa la integración en tiempo y forma de los expedientes de investigación, por lo que es la responsable de dictar la remisión de los expedientes de investigación a la Dirección de Responsabilidades en Asuntos Internos, misma que instruye la revisión y el registro de los expedientes de investigación remitidos por la Dirección de Investigación y Supervisión, vigilando que cumplan con los requisitos, por lo que de acuerdo a las funciones y al requerimiento adicional de información, se concluye que las quejas y denuncias se encuentran en proceso, por lo cual se establece que se pronuncia el área competente en atender la solicitud de información.

Por ende, se determina que la respuesta y el requerimiento de información fue proporcionada por la Unidad Administrativa Competente, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ya que turnó la solicitud al área en la que podría obrar la información de conformidad con la fracción XXXIX del artículo tercero de la legislación local vigente en materia de transparencia:

*XXXIX. Servidor público habilitado: Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar, gestionar y entregar la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia; respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la información.*

En este orden de ideas, se advierte que efectivamente la Unidad de Transparencia cumplió con lo expresado en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual menciona lo siguiente:

*“Artículo 162. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes* ***se turnen a todas las Áreas competentes*** *que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.”*

Por consiguiente, se tiene que el procedimiento de búsqueda de la información se ejecutó conforme a derecho.

Por otra parte, es de reiterar que si bien el particular solicitó el medio por el cual fueron recibidas, oficios emitidos, las acciones, acuerdos de cierre, remisión, análisis y toda la documentación de los expedientes de las denuncias y quejas.

Dicha información obra en la integración de los propios expedientes, los cuales **EL SUJETO OBLIGADO** al atender el requerimiento adicional de información señala que se encuentra en etapa de investigación, esto es, al momento de presentar la solicitud de información se encuentran en trámite, **por lo que este Instituto ha determinado que por el estatus en el que se encuentra dicha información,** actualiza la causal de reserva de información prevista en la fracción VI del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por ser parte de procesos administrativos, en donde se vinculados con quejas, denuncias, inconformidades de responsabilidades administrativas.

Aunado a lo anterior, de revelarse la información se atenta contra el principio de presunción de inocencia que debe seguirse en la administración de la justicia, conforme a lo que enseguida se razona.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la contradicción de tesis 200/2013 que en los procedimientos de responsabilidad administrativa es aplicable el principio de presunción de inocencia con sus respectivos matices. En la resolución son de interés los siguientes argumentos[[4]](#footnote-4).

*i. La Constitución Federal reconoce el estado o condición de inocencia de los gobernados, razón por la cual lo protege a través del derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, lo que significa que todo hombre debe ser tratado con tal calidad -inocente- hasta en tanto no se demuestre lo contrario.*

*ii. La presunción de inocencia se resguarda en el texto constitucional como derecho fundamental a favor de toda persona, con base en el cual se exige que para toda autoridad y ante el procedimiento al que se le sujete, no se estimen verosímiles los cargos atribuidos al gobernado respecto a la comisión de delitos, salvo decisión contraria emitida por un tribunal, dentro de la observancia del debido proceso.*

*iii. Este principio tendrá eficaz aplicación, sólo cuando el gobernado se enfrente a una acusación, cuyo propósito ha de ser el límite a la potestad represiva del Estado en ejercicio de su derecho punitivo, así se concebirá también a nuestro objeto de estudio como una garantía procesal a favor del imputado, dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento del orden administrativo.*

Se sigue que, el principio de presunción de inocencia tiene tres significados garantistas que en forma breve pueden enunciarse de la siguiente forma:

Primero. Como una regla probatoria, que impone la carga de la prueba para quien acusa y, por ende, la absolución en caso de duda.

Segundo. Como una regla de tratamiento del acusado, que excluye o restringe al máximo la limitación de sus derechos fundamentales, sobre todo los que inciden en su libertad personal, con motivo del proceso que se instaura en su contra.

Tercero. Como una regla de juicio, que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se aportaron pruebas de cargo suficientes.

En vista de lo anterior, este Instituto estima que en el derecho disciplinario que se sigue ante **EL SUJETO OBLIGADO** a los servidores públicos en los casos que se presenta una denuncia, es aplicable la regla garantista de presunción de inocencia.

Así, todo servidor público en su carácter de -presunto infractor- tiene el derecho, como regla de tratamiento en el proceso, a que se le trate en carácter de inocente hasta que no se emita una resolución firme.

La relación que guarda el principio de presunción de inocencia con el derecho de acceso a la información se da en dos variantes: (i) la conservación de información que no vicie las reglas y principios de administración de justicia y (ii) conservar la reputación de las personas que aún no se les ha comprobado con plenitud haber realizado alguna infracción.

Con más detenimiento, la primera premisa es que de revelarse la información de las personas a quienes se les ha iniciado un procedimiento administrativo y se encuentra pendiente de resolución rompería la regla de tratamiento y de juicio que debe seguirse en la administración de justicia*[[5]](#footnote-5)*, es decir, su incidencia tiene implicaciones que pudieran afectar la forma en cómo debe tratarse al servidor público acusado, pues no se ha comprobado en su totalidad que éste incurrió en una infracción, razón por la cual en dichos supuestos se deberá clasificar la información conforme a la causal establecida en el artículo 140, fracción VI de la Ley en la materia, debiendo llevar a cabo el procedimiento establecido en el Considerando siguiente, a fin poner a disposición de la parte recurrente el Acta del Comité de Transparencia que se elabore para tal efecto, debiendo elaborar la prueba de daño correspondiente.

Del artículo 140, fracción VI de la Ley en la materia, tenemos que la reserva procede cuando el daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes.

Dichos argumentos, que se formulan por este Organismo Garante se construyen a partir de la correlación que otros derechos tienen con el acceso a la información tratándose de información sobre procesos y procedimientos que siguen en forma de juicio, los cuales de la óptica de interdependencia de los derechos humanos no pueden ser desconocidos, en el ámbito de la competencia de este Instituto.

Resulta necesario tomar en cuenta el derecho al buen nombre y a la intimidad porque se considera que, hasta en tanto no exista una resolución firme, la publicación de la información solicitada afectaría la reputación de personas.

En el fondo, se considera que se puede atentar contra la honra y el buen nombre de una persona mediante la divulgación de información sobre aquellos servidores públicos a quienes se les ha iniciado un procedimiento administrativo, o bien, se encuentran pendientes de resolución porque podrían orientar el juicio que se tiene de una persona por parte de la sociedad, lo que en efecto constituye una lesión injustificada a la posición del hombre en sociedad.

Así las cosas, es de importante relevancia hacer del conocimiento del **Sujeto Obligado** que la información relativa a los expedientes que no han causado estado; es decir, que el principio de definitividad no se haya actualizado, por aún existir instancias para su revisión o impugnación, dicha información reviste el carácter de información reservada y en este caso, **se deberá emitir un acuerdo que clasifique como reservados los expedientes que se encuentran en trámite.**

Lo anterior es así, para dar seguridad jurídica al solicitante que por alguna excepción establecida en ley no es posible acceder temporalmente a la información referida anteriormente, para así no dejar en estado de indefensión y exista certeza jurídica de lo expuesto por el Sujeto Obligado.

*“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*[…]*

***XXIV. Información reservada:*** *La clasificada con este carácter de manera temporal por las disposiciones de esta Ley, cuya divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por esta Ley;*

*Artículo 122.* ***La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva*** *o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título.*

*Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y, en ningún caso, podrán contravenirla.*

*Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.*

***Artículo 125. La información clasificada como reservada, de acuerdo a lo establecido en esta Ley podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años,*** *contados a partir de su clasificación, salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción, dejaran de existir los motivos de su reserva.*

*Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido y tomarán en cuenta las razones que justifican el periodo de reserva establecido.*

*Excepcionalmente los sujetos obligados con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales y por una sola vez, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.*

*Cuando expiren los plazos de clasificación o se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, que a juicio de un Sujeto Obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información, el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y*

***…***

***Artículo 128. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.***

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva,* ***se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.***

*Tratándose de aquélla información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

*Artículo 129.* ***En la aplicación de la prueba de daño, el Sujeto Obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, justificando que:***

***I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;***

***II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y***

***III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.***

***Artículo 130. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia****, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley General y la presente Ley, aduciendo analogía o mayoría de razón.*

***Artículo 140. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:***

*[…]*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables…”*

De la interpretación sistemática de los artículos citados, se advierte que de actualizarse este supuesto, **EL SUJETO OBLIGADO** deberá realizar la debida reserva de la información por poseer expedientes que a la fecha de la solicitud se encuentren en trámite, siguiendo los requisitos expuestos:

*“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;*

*El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y*

*La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”*

Requisitos que deben estar acompañados de la debida fundamentación y motivación, cobrado aplicación lo que señala la jurisprudencia de la novena época visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis I.4o.A.J/43 (9a.) bajo el número de registro 175082 cuyo rubro y texto esgrime;

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.***

*El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo*[*16 constitucional*](about:blank)*relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción”*

Debiendo argumentar **EL SUJETO OBLIGADO** que la liberación de la información pueda amenazar el interés protegido por la ley, es decir esgrimir ideas jurídicas en el cual se evidencie la amenaza del daño o alteración al procedimiento que aduce el Sujeto Obligado, amparado de razones, y circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto en la norma legal invocada como fundamento, por la hipótesis análoga siendo aplicables los numerales 140, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (homólogo al artículo 113, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública), establece que aquella información que afecte o vulnere la conducción de procedimientos de responsabilidades administrativas, en tanto no hayan quedado firmes.

Por lo cual, la causal de reserva prevé que la información podrá clasificarse como reservada en el caso de que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, pretende proteger la información vinculada a dichos procedimientos.

Por su parte, en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, se establece lo siguiente:

*“…*

***Vigésimo octavo.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:*

*I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y*

*II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad…”*

De lo anterior, se advierte que para que se actualice la causal de reserva que se analiza se debe acreditar i) la existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y ii) que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.

Respecto al plazo de reserva, el artículo 125 de la Ley de la materia, establece que la información clasificada como reservada según el artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años; por lo que deberá determinar el periodo de reserva, de manera fundada y motivada.

Por otra parte, se considera de suma importancia mencionar que la Ley de Transparencia vigente en el Estado de México establece:

***Artículo 142.******Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando****:*

***I.******Se trate de violaciones graves de derechos humanos****, calificada así por autoridad competente;*

***II.******Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos*** *aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;*

***III.******Se trate de delitos de lesa humanidad*** *conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y*

***IV. Se trate de información relacionada con actos de corrupción*** *de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. (Énfasis añadido)*

Del artículo en estudio, se aprecia claramente en qué supuestos no se puede invocar el carácter de reservada, no obstante, es de recordar que en el requerimiento adicional de información, **EL SUJETO OBLIGADO**, señalo que las denuncias no actualice alguno de los supuestos contemplados en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios.

De ahí que, resulta procedente la reserva, de los documentales que integran las denuncias presentas del 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2024 en la Dirección de Investigación y Supervisión, en términos del artículo 140, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de los procedimientos por responsabilidades administrativas en trámite.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**R E S U E L V E:**

**PRIMERO.** Resultan fundados los motivos de inconformidad hechos valer por **LA PARTE RECURRENTE** en el Recurso de Revisión **00709/INFOEM/IP/RR/2025,** por lo que, en términos del considerando **Cuarto** de esta resolución, se **REVOCA** la respuesta emitida por **EL** **SUJETO OBLIGADO**.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **SUJETO OBLIGADO** en términos de los Considerandos **Cuarto y Quinto** de esta resolución, haga entrega, vía **SAIMEX**, de ser el caso en versión pública, de lo siguiente:

* Acuerdo del Comité de Transparencia en el que se clasifique como información reservada los documentales que integran las denuncias presentadas ante **EL SUJETO OBLIGADO** del 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2024 de conformidad con los artículos 128, 129, 135 y 140 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

**TERCERO.** Notifíquese vía SAIMEX, la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese vía SAIMEX, a la parte Recurrente la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o bien, vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA (EMITIENDO VOTO PARTICULAR) Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Artículo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: (…) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: (…) XXII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados…” [↑](#footnote-ref-2)
3. *Artículo 164. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad solicitada, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Ver páginas 71 y 72 de la contradicción de tesis 200/2013, específicamente los epígrafes 84, 85 y 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ver supra. Página 24. [↑](#footnote-ref-5)